



Proceso	Verbal
Demandante	Jorge Iván Ríos Penagos
Demandado	María Ofelia Castaño Vallejo y otros
Radicado	No. 05266-31-03-001-2015-00715-01
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 046
Decisión	Confirma
Tema	Simulación
Subtemas	Sanción del art. 1824 del Código Civil. Requisitos para imponer la sanción. Jurisprudencia. Carga de la prueba.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, trece de diciembre de dos mil veintiuno

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ENVIGADO (Ant.)**, en el proceso ordinario instaurado por **JORGE IVÁN DE JESÚS RÍOS PENAGOS**, contra **MARÍA OFELIA DEL SOCORRO CASTAÑO**

VALLEJO, ANA CRISTINA RÍOS CASTAÑO, JULIÁN MAURICIO RÍOS CASTAÑO y JUAN MANUEL RÍOS CASTAÑO.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones: Como principales invoca el demandante: Se declare absolutamente simulado el contrato de donación contenido en la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de la Estrella – Antioquia, celebrado por la señora María Ofelia del Socorro Castaño Torres y sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, del inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-17928 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia (Ant.); dejar sin valor y efecto el referido acto y ordenar la cancelación de la inscripción en la oficina de registro; declarar que el inmueble pertenece a la sociedad conyugal conformada por los señores Ríos Penagos y Castaño Vallejo; consecuentemente, ordenar a los codemandados Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño restituir la propiedad a la sociedad conyugal así como los frutos civiles y/o perjuicios que ascienden a \$6.000.000.00, más los que se sigan causando hasta la fecha de la sentencia o los que resulten probados; se imponga a la codemandada María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, la sanción prevista en el art. 1824 del C. Civil, de pérdida de su porción en el precitado bien, el cual hace parte de la sociedad conyugal y se le condene a restituir

su valor doblado, conforme al avalúo aportado o al que se practique en el proceso.

Como primeras subsidiarias solicita: Declarar que la donación que realizó la señora María Ofelia del Socorro Castaño Torres a favor de sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, contenida en la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de la Estrella – Antioquia, del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-17928 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia (Ant.); es absolutamente nula por causa ilícita y por no cumplir los requisitos legales; dejar sin valor y efecto dicho acto y ordenar la cancelación de la inscripción en la oficina de registro; declarar que el inmueble pertenece a la sociedad conyugal conformada por los señores Ríos Penagos y Castaño Vallejo; consecuentemente, ordenar a los codemandados Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, restituir la propiedad a la sociedad conyugal así como los frutos civiles y/o perjuicios que ascienden a \$6.000.000.00, más los que se sigan causando hasta la fecha de la sentencia o los que resulten probados; se imponga a la codemandada María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, la sanción prevista en el art. 1824 del C. Civil, perdiendo su porción sobre el precitado bien, el cual hace parte de la sociedad conyugal y se le condene a restituir su valor doblado, conforme al avalúo aportado o al que se practique en el proceso; condenar a los encausados al pago de los perjuicios por daños morales y a la vida de relación causados al pretensor, tasados en 50

SMLMV que equivalen a \$32.215.500,00, o los que resulten acreditados.

Segundas subsidiarias: Declarar nula la donación que la señora María Ofelia del Socorro Castaño Torres, realizó a favor de sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, contenida en la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de la Estrella – Antioquia, respecto al bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 010-17928 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia (Ant.); en lo que exceda de 50 SMLMV para el año 2014; dejar sin valor y efecto dicho acto y ordenar la cancelación de la inscripción en la oficina de registro; declarar que el citado inmueble pertenece a la sociedad conyugal conformada por los señores Ríos Penagos y Castaño Vallejo; consecuentemente, ordenar a los codemandados Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, restituir la propiedad a la sociedad conyugal así como los frutos civiles y/o perjuicios que ascienden a \$6.000.000.00, más los que se sigan causando hasta la fecha de la sentencia o los que resulten probados; se imponga a la demandada María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, la sanción prevista en el art. 1824 del C. Civil, perdiendo su porción sobre el precitado bien el cual hace parte de la sociedad conyugal y se le condene a restituir su valor doblado, conforme al avalúo aportado o al que se practique en el proceso; o en su defecto, se le condene a pagar a la sociedad conyugal el equivalente a 50 SMLMV para

el año 2014, por haber donado el inmueble sin ser de su exclusiva propiedad.

Como pretensión común solicita se condene en costas a los demandados.

Elementos fácticos: Afirma el demandante que contrajo matrimonio con la señora María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, el 09 de abril de 1988, fruto de la unión procrearon a Ana Cristina, Julián Mauricio y Juan Manuel; en el año 1992, los cónyuges adquirieron por compraventa el lote de terreno No. 12 de la manzana No. 23, sector La Variante del Municipio de Fredonia, con un área de 66 M2., y distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-7989 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia (Ant.); la venta se hizo a nombre de la señora Castaño Vallejo, como consta en la escritura pública No. 159 del 12 de mayo de 1992, otorgada en la Notaría Única de Fredonia, debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria; los consortes construyeron tres (3) plantas; el segundo y tercer piso conforman una unidad habitacional donde se trasladaron a vivir junto con sus hijos y el primer nivel, un apartamento acondicionado por el demandante hace 18 años para local comercial, en la parte de adelante colocó el establecimiento de comercio denominado "*Cafetería La Variante*" que viene explotando desde entonces y, en la parte de atrás un apartamento; en el año 2010, la señora Castaño Vallejo exigió al pretensor que desocupara el apartamento donde residían y se pasara a vivir al primer piso porque iba a independizar el segundo y tercer nivel para sacarle una renta a este último, lo que

efectivamente aconteció; en el año 2010 la señora María Ofelia sin el consentimiento del demandante retiró del colegio a su hijo Juan Manuel y se lo llevó a estudiar a la ciudad de Medellín, donde venían cursando estudios superiores sus otros hijos Ana Cristina Ríos Castaño y Julián Mauricio Ríos Castaño; el pretensor quedó en el primer piso y la señora Castaño Vallejo procedió a dar en arrendamiento los apartamentos del segundo y tercer nivel, de los cuales el actor pagaba los servicios públicos y los impuestos cuando estaban desocupados; en el año 2011 el abogado de la señora María Ofelia se acercó al negocio del pretensor informando que su poderdante quería que se divorciaran de mutuo acuerdo y frente a los bienes que ésta se quedaba con los apartamentos del segundo y tercer piso de la propiedad; a pesar que el señor Ríos Penagos otorgó poder al profesional del derecho quien es hermano de la codemandada, éste no adelantó trámite alguno porque su hermana había cambiado de parecer; no obstante, el demandante continuó visitando y llevando la manutención de sus hijos; a mediados del año 2015, el pretensor fue notificado de la demanda de divorcio que se venía adelantando ante el Juzgado de Familia de Fredonia y procedió a revisar el certificado de libertad de la propiedad advirtiéndole que la señora María Ofelia Castaño Vallejo, por acto escriturario No. 224 del 31 de marzo de 2014, extendido en la Notaría Única de La Estrella, constituyó el reglamento de propiedad horizontal quedando las tres (3) propiedades independientes, y enajenó a la señora Victoria Elena Cano Grisales el apartamento del segundo piso y a Daniela López Jaramillo, Leidy Alejandra López Jaramillo y Jully Paulina López Jaramillo, hijas de Martha Jaramillo y

Mauricio López Zapata, el del tercer nivel; los cuales fueron enajenados en \$80.000.000.00, es decir, \$40.000.000,00 por cada uno, dineros que recibió la señora Castaño Vallejo y que ocultó a pesar que hacen parte de la sociedad conyugal; igualmente, el demandante advirtió que el bien del primer piso había sido donado por la codemandada a sus hijos comunes Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, con el fin de defraudar la sociedad conyugal y afectar el patrimonio del actor; actuando con dolo manifiesto, pues todo lo hizo de manera oculta, sistemática y premeditada; el actor desde hace aproximadamente 18 años detenta materialmente el inmueble del primer piso, sin que nadie le reclame la titularidad sobre el mismo; el contrato de donación es absolutamente simulado porque nunca hubo la intención de donar porque todo fue fingido para sustraer el bien de la masa de la sociedad conyugal; además, para efectos fiscales como precio indicó \$8.200.000.00, cuando dicho bien para el año 2014 tenía un avalúo catastral de \$14.000.000.00 y comercial de \$65.000.000.00; la codemandada dejó consignado que el bien y las mejoras plantadas eran de su exclusiva propiedad cuando en realidad pertenecían a la sociedad conyugal; la supuesta donación se realizó sin mediar insinuación porque el valor comercial del bien era de \$65.000.000.00; el acto escriturario fue otorgado en un lugar distante a la ubicación de los bienes y que no era el habitual para realizar tales actos; amén, que no hubo entrega material por parte de la donante pues como viene de indicarse el pretensor ostenta desde hace 18 años la posesión material de manera pacífica e ininterrumpida como señor y

dueño; el contrato de donación también presenta vicios de tipo legal por causa ilícita y falta de los requisitos legales porque nunca existió la voluntad de la señora Castaño Vallejo de transferir gratuitamente el inmueble, sino de ocultarlo para luego adelantar el divorcio sin que el pretensor pudiera reclamar nada, defraudando a la sociedad conyugal; además, no denunció el valor comercial del inmueble para verificar si debía hacer insinuación, incumpliendo con lo previsto en el Decreto 1712 de 1989; amén, que el Notario no exigió el avalúo comercial de la cosa donada como era su deber, con lo cual se presentó una omisión en los requisitos para la celebración de dicho acto; la señora María Ofelia con el ánimo de defraudar la sociedad conyugal, se insolventó, retiró las cesantías a que tenía derecho como docente, vendió los apartamentos del segundo y tercer piso en \$80.000.000.00, los cuales ocultó y de manera fingida donó a sus hijos la propiedad del primer nivel; actuar abiertamente doloso que la hace acreedora a la sanción prevista en el art. 1824 del C. Civil; al pretensor se le ha causado un enorme grado de aflicción y dolor al punto que su estado de salud se ha venido deteriorando, pues desde el año 2015 ha presentado serios quebrantos de salud, siendo hospitalizado y sometido a varios procedimientos quirúrgicos, como consta en la historia clínica; incluso, lleva más de un año incapacitado para trabajar en la cafetería y debe ser sometido a otra cirugía; los demandados deben ser condenados al pago de los daños morales y a la vida de relación, tasados en 50 SMLMV; igualmente la demandada María Ofelia Castaño Vallejo, se debe sancionar como lo ordena el art. 1824 del C. Civil, por haber distraído dolosamente el bien del haber social.

Admisión de la demanda y réplica: Admitida la demanda por auto del 18 de enero de 2016 (folio 128 cuaderno principal), y notificado al extremo pasivo, la replicó, se opuso a las pretensiones y como medios de defensa propuso: **i) falta de causa para pedir y, ii) temeridad y mala fe.**

Sentencia: Se profirió el 12 de diciembre de 2018, con la siguiente resolución:

"PRIMERO: DECLARAR que es absolutamente simulado el acto de DONACIÓN, contenido en la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de La Estrella, en virtud de la cual la señora MARÍA OFELIA DEL SOCORRO CASTAÑO VALLEJO dijo transferir a favor de sus hijos ANA CRISTINA RIOS CASTAÑO, JULIAN MAURICIO RIOS CASTAÑO y JUAN MANUEL RIOS CASTAÑO el inmueble ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia, primer piso –apartamento y local comercial- que se distingue con la M.I. **010-17928**, a título de donación.

"SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se deja sin valor ni efecto jurídico dicho acto, para lo cual se ordena que por la secretaría se oficie al Notario Único del Circulo Notarial de la Estrella para la cancelación de dicha Escritura Pública, exclusivamente en lo que concierne a la donación, así como al Registrador de Instrumentos Públicos del municipio de Fredonia, para que proceda a cancelar el registro de la misma, en el folio inmobiliario asignado al citado bien **010-17928**.

"TERCERO: ORDENAR al señor JORGE IVAN DE JESÚS RIOS PENAGOS la restitución del inmueble primer piso – apartamento y local comercial- ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia, que se distingue con la M.I. **010-17928** a la sociedad conyugal conformada con la señora MARÍA OFELIA CASTAÑO VALLEJO, para efectos de la liquidación de los bienes sociales.

"CUARTO: NEGAR la restitución de los frutos civiles y/o perjuicios que se reclama de los presuntos donatarios, por cuanto no se acreditaron y **NEGAR** asimismo la sanción pretendida con fundamento en el artículo 1824 del CC.

"QUINTO: ORDENAR el levantamiento de la inscripción de la demanda, que recae sobre el inmueble objeto de la donación cuya simulación fue declarada, decisión que se comunicará por la secretaría al Registrador de IIPP de Fredonia, mediante oficio.

"SEXTO: IMPONER condena en costas a los demandados, a favor del demandante, en la suma que se liquide por la secretaría del Juzgado y en la cual se incluirán por concepto de agencias en derecho, la suma de \$3.906.200, atendiendo a los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA-16 10554 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura".

La sentencia plantea como problema jurídico a resolver el determinar si es absolutamente simulado el acto de donación contenido en el escritura pública No. 224 del 31 de marzo de

2014, otorgada en la Notaría Única de La Estrella y celebrado entre la codemandada María Ofelia del Socorro Castaño, Vallejo como donante y sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, como donatarios, en relación con el inmueble, consistente en un primer piso, apartamento y local comercial, ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia y distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-17928; de no prosperar las pretensiones principales se entrará a desatar las propuestas como subsidiarias.

Para la donación de bienes raíces el art. 1857 del C. Civil exige la solemnidad de la escritura pública; al efecto, con la demanda se aportó copia autentica de la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de La Estrella, en la que además de constituir el reglamento de propiedad horizontal, la señora María Ofelia Castaño Vallejo realizó las ventas del segundo y tercer nivel, las que no son objeto de cuestionamiento y según lo afirmaron las propias compradoras fueron conocidas por el demandante quien les facilitó el número telefónico de su consorte, lo que ratificó el testigo Francisco Javier Castaño Vallejo; así como la donación que se cuestiona y realizada por la señora Castaño Vallejo a sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, sobre el inmueble del primer piso apartamento y local comercial, ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia, distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-17928, abierta con base en la matrícula del lote de terreno inicialmente adquirido por los cónyuges; con este documento

se acredita la transferencia del dominio del bien objeto de la donación, toda vez, que la escritura pública que incorpora dicho acto fue debidamente registrada.

El testigo Francisco Javier Castaño Vallejo, hermano de la codemandada, manifestó que el inmueble del primer piso es de sus sobrinos pero desconoce a qué título lo adquirieron, que según entiende fue una compraventa, pero desconoce cuánto pagaron y cómo obtuvieron los recursos; que el demandante es quien ocupa el local comercial pero no sabe si les paga arriendo a sus sobrinos o los participa de las ganancias, aunque según éstos le han manifestado que no reciben participación alguna; además afirmó, que no está seguro si el demandante tuvo conocimiento de la donación del local comercial y del apartamento del primer piso, pero que de la venta de los dos apartamentos si la conoció.

En los interrogatorios de parte que absolvieron los demandados afirmaron que siempre escucharon decir a sus padres que los apartamentos del segundo y tercer nivel, así como el local y apartamento del primer piso, eran para cada uno de ellos, y que las ventas de los apartamentos fue acordada por sus padres para solventar las deudas que se habían acrecentado por el pago de la universidad de los hijos mayores, que según dijo la señora María Ofelia ascendía a nueve o diez millones de pesos, la estadía en la ciudad de Medellín primero donde un hermano y, luego pagando arriendo, los pasajes que debían destinar y los préstamos para la construcción; pero, lo cierto es que estas afirmaciones carecen de respaldo probatorio como lo admitió la apoderada

del extremo pasivo en las alegaciones de conclusión; amén, que el testigo Francisco Javier Castaño Vallejo, al ser interrogado sobre las razones que llevaron a la señora María Ofelia a enajenar los apartamentos hizo mención al sostenimiento y educación de los hijos, agregando que en varias ocasiones habló de ello con su hermana; lo cierto es que la armonía y el dialogo que la señora María Ofelia Castaño Vallejo, quiso mostrar reinaba en su relación con el demandante y la afirmación que para la fecha en que se concretaron las ventas y la donación, no tenían proyectado divorciarse y que dicho acto fue producto del acuerdo al que llegó con aquél, con la loable intención de asegurar el futuro de los hijos en el evento que alguno de ellos faltara, quedaron desvirtuadas con la prueba oral recibida; es así como el codemandado Julián Mauricio al ser indagado sobre el divorcio de sus padres, afirmó que a pesar de que hace varios años venían con problemas, siempre intentaron manejarlo entre ellos y no hacerlo evidente frente a los hijos, hubo muchas discusiones; en el 2010 cuando todavía estaba en el colegio y en el 2011 la cosa empeoró mucho; en igual sentido se pronunció el testigo Francisco Javier Castaño Vallejo al señalar que para el año 2010 o 2011, la pareja presentaba serias dificultades y habían convenido divorciarse en varias ocasiones; decisión que se hizo más firme en el 2011 cuando le solicitaron que les ayudara para el divorcio de mutuo acuerdo y le otorgaron poder, en el que se estipuló lo relativo a las obligaciones alimentarias como lo exige la ley, pero nada se dijo sobre la liquidación de la sociedad conyugal a la que se alude por el demandante; pero cuando fue a iniciar los trámites, ellos estaban compartiendo y por cuestiones

morales dada la relación de parentesco con su hermana y de amistad con su cuñado, a quienes consideraba una buena pareja al margen de los problemas que tuvieran, no adelantó el divorcio y en el año 2012 empezó a laborar como servidor público y, por tanto, no podía colaborarles.

Estas versiones fueron confirmadas por la codemandada María Ofelia Castaño Vallejo, quien al absolver el interrogatorio de parte, allegado como prueba trasladada, no obstante insistir en que el demandante tuvo conocimiento de dicho acto, el cual realizó por el bien de sus hijos; indicó, que hace más de cinco (5) años que están separados de hecho, más o menos desde el 2010 o 2011, eso fue a principio del año, en enero; la trasladaron porque concursó para coordinación, se fue a trabajar a Santa Fe de Antioquia y él la visitaba, estuvo cuatro (4) años, luego la trasladaron a Copacabana más o menos 2012 o 2013, estuvo nueve (9) meses y luego para La Estrella hace cuatro años más o menos, donde se encuentra; esto es desde el 2012; para esa fecha ya no convivían; cuando se fue para Santa Fe de Antioquia los dos hijos mayores estaban en Medellín donde un hermano suyo y el papá estaba con el menor, ella viajaba regularmente donde los hijos a Medellín, pero el niño ya no pudo vivir con el papá porque éste permanecía en los billares bebiendo, y cuando lo llamó le dijo que se lo llevara; dejaron de tener convivencia cuando se vino para La Estrella porque él le dijo que ya vivía con otra señora de nombre Herlinda, que ya no quería vivir con ella, no obstante que muchas veces le dijo que se fuera a vivir con ellos, pero él respondía que vivía con otra y se quedaba con ella; en unas vacaciones, en

junio fue con los hijos, él no iba a visitarlos y no les aportaba, entonces le preguntó y le dijo que definitivamente no quería vivir con ella; sus hijos ya son mayores, el demandante no buscó la conciliación, ella sí porque era valioso que conservaran la familia y que los hijos tuvieran el papá pero él nunca aceptó; el trato con el pretensor en el tiempo que convivieron fue muy difícil porque bebía mucho, era muy grosero, la trataba muy mal y no había posibilidad de dialogo porque es muy cerrado en las posiciones que asume y verbalmente es muy agresivo; no había manera de concertar a más que también era grosero con los hijos y no les brinda ningún acompañamiento porque bebía tres o cuatro días; dicha manifestación sumado a lo afirmado por el testigo Francisco Javier Castaño Vallejo y por el codemandado Julián Mauricio pone en evidencia que lo señalado por la señora María Ofelia en cuanto a la venta de los dos apartamentos y la donación a favor de sus hijos no es creíble para el Despacho porque la misma demandada puso de presente la imposibilidad de concertar con el demandante.

Frente al segundo elemento de la simulación; esto es, la legitimación en la causa por parte del demandante y el interés para obrar, corresponde a uno de los elementos indispensables para la decisión de fondo como lo ha señalado la jurisprudencia; en el plenario está acreditado que el demandante contrajo matrimonio con la codemandada María Ofelia Castaño Vallejo el 09 de abril de 1988, que por virtud de dicho vínculo se formó entre ellos una sociedad de bienes; además, se allegó copia de la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, copia del auto

admisorio y de la demanda de reconvención que promovió el aquí demandante, proceso que según se afirma en la demanda terminó con sentencia favorable a la señora María Ofelia el 16 de enero de 2017, sin que hubiera allegado la respectiva copia; se advierte que una vez disuelta la sociedad conyugal, el demandante está legitimado en la causa para actuar y le existe interés para obrar; teniendo en cuenta que el líbello demandador fue presentado el 16 de diciembre de 2015, con posterioridad a la presentación de la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, que fue radicada en el mes de mayo de la misma anualidad y una vez notificado el demandante presentó demanda de reconvención en agosto de 2015; dichos elementos no se desvirtúan por el hecho de que el contrato de donación se celebró antes de la cesación de los efectos civiles de matrimonio católico y la consecuente disolución de la sociedad conyugal; si bien es cierto en art. 1º de la Ley 28 de 1932, establece que *"durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiriera"*; la misma disposición prevé que: *"a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación"*; lo que resulta consonante con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Efectuado el análisis de las pruebas en torno a los aspectos que destaca la parte demandante para acreditar la existencia real de la donación y que se concretan en que la misma no existió, porque no hubo intención de donar, que fue concertada con los donatarios para defraudar la sociedad conyugal y para que al demandante no le correspondiera nada en la liquidación; se tiene, que atendiendo a las condiciones particulares que rodearon la celebración del contrato de donación, no queda duda que se configuran una serie de indicios que al decir de la Corte son convergentes y que autorizan para concluir que el contrato de donación contenido en la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de La Estrella, por parte de la señora María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, en favor de sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, sobre el primer piso ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia, conformado por un local y un apartamento es absolutamente simulado; nótese que además del vínculo de consanguinidad que une a quienes comparecieron a la simulación de la donación, se tiene, que quienes adquirieron a dicho título nunca han ostentado la posesión material del bien que les fue transferido, dado que está plenamente acreditado que nunca reclamaron a su padre el inmueble pese a que no se constituyó usufructo a su favor, so pretexto que el acuerdo que se había hecho era que su padre continuara allí y pudiera trabajar como siempre lo ha hecho; a ello se suma, la disposición de las tres propiedades que adquirieron los consortes durante la vigencia de la sociedad conyugal, dado que la venta de los dos apartamentos y la donación del

primer piso –local y apartamento- se hicieron en el mismo acto escriturario, sin que exista prueba alguna del conocimiento que tenía el demandante de que en esa misma escritura se iba a hacer la donación del primer piso; cabe destacar el móvil que se puede deducir para la simulación cual era evitar que el pretensor tuviera participación en los bienes sociales y, que eventualmente de ello se beneficiara su nueva compañera, la señora Herminia con la que estaba viviendo, como lo dijo la demandada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Amagá; también constituye indicio de la simulación el tiempo sospechoso del negocio, toda vez, que pese a que en el 2011 acordaron que se divorciarían de mutuo acuerdo y otorgaron poder al hermano de la señora María Ofelia, esto es al doctor Francisco Javier Castaño Vallejo, indiscutiblemente la señora María Ofelia no insistió en ello durante los dos o tres años siguientes, aprovechando este tiempo para constituir el reglamento de propiedad horizontal, legalizar las ventas y hacer la donación del primer piso a sus hijos, y como lo advierte la togada del demandante en sus alegaciones, cuando todos los bienes que habían adquirido en vigencia de la sociedad conyugal habían pasado a manos de terceros, incluidos sus hijos, esto es, cuando no había en el haber social ningún bien del que pudiera beneficiarse el demandante, procedió a presentar la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, consciente que su prosperidad conllevaría la disolución y posterior liquidación de la sociedad conyugal, de tal forma que al no existir bienes para partir, al pretensor no le iba a corresponder nada de lo que habían adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal; igualmente, es indiciario el lugar del negocio

sospechoso, toda vez que si bien los testigos coincidieron en afirmar que se había escogido el municipio de La Estrella porque allí laboraba la señora María Ofelia y porque las hijas de la señora Martha Jaramillo vivían por Sudamérica como lo manifestó uno de los hijos y porque Ana Cristina estaba realizando las prácticas en ese municipio, y los demás hijos estaban radicados en Sabaneta; ello es indicativo que lo que se quiso fue evitar que los hijos se tuvieran que desplazar hasta el municipio de Fredonia, y como bien lo precisó la apoderada de la parte demandada "*pueblo chiquito infierno grande*", que el demandante se enterase de la presencia de sus hijos en ese municipio y concretamente del trámite de donación que iban a realizar en la Notaría; el demandante fue reiterativo en afirmar que se enteró que sus hijos figuraban como dueños del local y del apartamento del primer piso cuando recibió la cuenta del impuesto predial a nombre de éstos, lo que fue corroborado por el testigo Francisco Javier Castaño Vallejo, quien afirmó haber conocido de la propiedad del primer piso en cabeza de sus sobrinos cuando el señor Jorge Iván fue a su casa y le informó de ello; hecho que también corroboró la señora Nora Maya, quien según lo destacó la apoderada del extremo pasivo es testigo de oídas lo que comparte el Juzgado, puesto que el conocimiento sobre los hechos lo derivó del demandante, pero la misma sí presencié el momento en el cual el actor recibió la cuenta del impuesto predial y se dirigió a enseñársela al señor Francisco Javier Castaño Vallejo.

Fluye de lo expuesto que, la pretensión de simulación absoluta formulada por el señor Jorge Iván de Jesús Ríos

Penagos, en contra de su ex cónyuge María Ofelia Castaño Vallejo y de sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, debe ser acogida, lo que implica que el contrato de donación carece de efectos jurídicos por cuanto no hubo voluntad real, seria y manifiesta, consentimiento o intención de parte de la señora María Ofelia de transferir el inmueble a sus hijos a título de donación, de modo que habrá de restituirse las cosas en el estado en que se hallaban para el momento en que se celebró dicho acto. Lo anterior impone, ordenar la cancelación de la escritura pública No. 224 del 31 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría Única de La Estrella, en virtud de la cual la señora María Ofelia Castaño Vallejo dijo transferir a favor de sus hijos Ana Cristina Ríos Castaño, Julián Mauricio Ríos Castaño y Juan Manuel Ríos Castaño, el inmueble ubicado en la carrera 48 No. 46-250 del municipio de Fredonia, primer piso, local comercial y apartamento, distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 010-17928; asimismo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia, la cancelación de dicho acto en el folio de matrícula inmobiliaria, pero únicamente en lo que respecta a la donación, e igualmente se ordenará la restitución por parte del demandante para efectos de la liquidación de los bienes sociales dada la disolución de la sociedad conyugal que operó en virtud de la sentencia de cesación de efectos civiles de matrimonio católico que acogió la pretensión de divorcio. Frente a la precisión de la cancelación de la escritura y del registro en punto exclusivo a la donación, obedece a que en dicho acto escriturario se plasmaron otros actos como la constitución del reglamento de propiedad horizontal del

inmueble y las ventas de los apartamentos del segundo y tercer piso, los cuales no fueron objeto de cuestionamiento en este proceso; en relación con la restitución del inmueble a la sociedad conyugal, para que haga parte de los bienes sociales a liquidar, se tiene, que está acreditado que quien ocupa y ha ocupado la propiedad es el demandante, será entonces éste quien debe proceder a la restitución de dicho bien a favor de la sociedad conyugal; en torno al pago de los frutos civiles y/o perjuicios, se advierte, que en el plenario no obra prueba alguna que permita determinar su valor, a lo que se suma que está demostrado que los donatarios nunca ejercieron posesión material sobre la propiedad ni explotación alguna, ni han percibido ningún tipo de arrendamiento, de tal modo que no hay lugar al reconocimiento de frutos civiles; se negará asimismo la sanción regulada en el Art. 1824 del C. Civil, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que lo que se sanciona es el acto doloso en el ocultamiento o distracción de alguna cosa de la sociedad conyugal, cuya consecuencia es la pérdida de la porción sobre la misma y la obligación de restituirla doblada; presuponiendo como requisito para su aplicación no solo la acreditación del sujeto, del bien social, del ocultamiento o distracción, sino también del dolo, pues este solo se presume en los casos expresamente señalados en el ordenamiento jurídico, como lo dispone el art. 1516 del C. Civil; siendo por tanto, indispensable probar la ocultación o distracción intencional y dolosa de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal; así las cosas, la supuesta donación que fue declarada simulada de manera absoluta se realizó en el año 2014; esto es,

cuando aún estaba vigente el matrimonio y no se había disuelto ni sometido a estado de liquidación la sociedad conyugal; siendo improcedente imponer la sanción prevista en el Art. 1824 del C. Civil, más aún que el mero hecho de la simulación absoluta no significa per se un dolo manifiesto si se tiene en cuenta que la Corte ha sido clara, en cuanto a que la simulación en sí misma no es un acto ilícito ni doloso, sino que es un acto permitido por el derecho en reconocimiento a la autonomía de la voluntad en el que las partes pueden decidir libremente de qué manera transfieren los bienes de su patrimonio. Finalmente se condenará en costas a los demandados.

Apelación: Lo interpuso la parte demandante y como reparos indica: No comparte lo decidido en cuanto a la inaplicación de la sanción prevista en el art. 1824 del C. Civil, porque el actuar de la señora María Ofelia Castaño Vallejo, fue mal intencionado al ocultar unos dineros y sustraer bienes de la sociedad conyugal que constituyó con el demandante, lo que se refleja en los hechos adelantados en los años 2014 y 2015, puesto que el 31 de marzo de 2014, valiéndose de sus hijos procedió a distraer uno de los bienes de la sociedad conyugal; la conducta dolosa de la codemandada también se puede constatar en la misma escritura donde realizó una venta por un valor aproximado de \$80.000.000.00, que ocultó con el fin de defraudar a la sociedad conyugal; está acreditado que cuando la señora María Ofelia distrajo todos los bienes de la sociedad instauró la demanda de divorcio contra su cónyuge; además, se debe tener presente lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema

de Justicia, en sentencia 16280 del 11 de noviembre de 2016; el actuar antijurídico de la señora María Ofelia se demostró con la prueba documental y testimonial que se trajo, que dan cuenta del ocultamiento de los dineros y de los bienes de la sociedad conyugal, lo que hizo de manera maquinada entre los años 2014 y 2015 para que a su nombre no quedara ningún bien y para que a su cónyuge no le correspondiera nada de la sociedad conyugal; actuar que no deja duda que la finalidad era la defraudar la sociedad conyugal.

En segunda instancia, dentro del término del traslado para sustentar el recuso de apelación, señaló que el a quo declaró la simulación deprecada y a pesar que la mala fe de la codemandada, el propósito temerario, malintencionado de ocultar dineros y distraer bienes de la sociedad conyugal estaban acreditados, la pretensión no fue acogida tomando como fundamento algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia; pero dejó de lado que la Corporación cambió dicho criterio, pasando a transcribir en extenso las sentencias que le sirven de sustento de tal afirmación; termina señalando que en el presente caso, se acreditó que la codemandada María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, actuó de manera dolosa al transferir de forma simulada a sus hijos el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 01-17928 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fredonia (Ant.); buscando defraudar a la sociedad conyugal para que al pretensor no le correspondiera nada al momento de liquidarla; conducta temeraria y dolosa que quedó demostrada al igual que la ocultación de los dineros de las

ventas de los dos apartamentos y de los que retiró por concepto de cesantías; presentando en ceros el inventario de la sociedad conyugal para que el demandante no tuviera nada que reclamar. Por estas razones, solicita revocar parcialmente la sentencia de primer grado, y en su lugar, imponer al extremo pasivo María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo, la sanción prevista en el Art. 1824 del Código Civil.

Dentro del término del traslado el extremo pasivo, se opuso a la prosperidad del recurso interpuesto y como sustento realiza un paralelo entre lo solicitado en la demandada y lo acreditado en el proceso; para con base en ello colegir, que incumbía a la parte demandante la carga de la prueba (Art. 167 del C.G.P.) para que se impusiera la sanción solicitada a la codemandada; cometido que no cumplió porque las pruebas allegadas al plenario no dan cuenta del proceder que se endilga a la señora Castaño Vallejo.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico: El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado, plantea el siguiente problema jurídico que la Sala debe resolver: ¿Se debe imponer a la codemandada María Ofelia Castaño Vallejo la sanción a que se contrae el art. 1824 del C. Civil?

El caso concreto: Frente a la sanción por el ocultamiento o distracción de bienes sociales el art. 1824 del C. Civil, consagra: *“Aquel de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la*

sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada”; de donde se sigue, que la sanción no opera de pleno derecho y automáticamente, porque para su imposición se requiere pruebas idóneas, fehacientes y contundentes del dolo del cónyuge o los herederos al ocultar o distraer los bienes de la sociedad; lo que implica que más del pleno conocimiento del cónyuge o los herederos de que se trata de un bien social, se requiere de la intención de causar daño al otro consorte o a los demás herederos, pues lo que se busca es sancionar esa maniobra fraudulenta y dolosa; además, no se puede pasar por alto que por mandato del art. 1º de la Ley 28 de 1932, durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenecían al momento de contraer matrimonio o que hubiera aportado a él, así como de los demás que por cualquier causa adquiriera con posterioridad. Otra situación bien diferente, es la que se presenta una vez que se ha disuelto la sociedad conyugal, en cuyo caso, los consortes pierden la administración sobre esos bienes que pertenecen al haber de la sociedad conyugal y, en este caso, cualquier acto de disposición es ilícito porque recae sobre un bien que no le pertenece y es ajeno, estando reservada la sanción para este evento, como lo precisa la doctrina de la Corte, al puntualizar:

“4. El artículo 1824 del Código Civil, fundamento de la acción promovida, hace parte del título XXII libro IV del Código Civil, en lo relativo a «la disolución de la sociedad conyugal y partición de gananciales», norma según la cual

«[a]qué! de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada».

“La disposición citada propugna por garantizar la exactitud y la buena fe en la elaboración del inventario de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial al momento de su disolución, en pos de lo cual contempla una drástica sanción pecuniaria civil, contra el cónyuge o los herederos (no frente a terceros), que oculten o distraigan de manera dolosa elementos del activo patrimonial de aquella.

“La conducta de «ocultar» puede alcanzar su realización, verbi gratia, cuando se esconde o disfraza o encubre la realidad de la situación jurídica de un determinado bien, a fin de evitar que se conozca puntualmente el activo real de la sociedad conyugal o patrimonial que se ha disuelto, y el comportamiento de «distraer» bienes sociales, se puede concretar, por ejemplo, a través de acciones fraudulentas, o de desvío de tales cosas, para impedir que sean incorporados a la masa partible, ya sea mediante actos o negocios jurídicos de disposición que hagan dispendiosa o imposible su recuperación.

“En los dos eventos reseñados, la actuación del cónyuge, compañero (a) permanente o heredero, debe ser dolosa, esto es, ejecutada con la conciencia o intención de engañar al otro integrante de la pareja, o a sus causahabientes, para que no tengan participación en la totalidad de los bienes del «haber

social», y así desmejorar o menoscabar sus derechos legítimos.

“En caso de estructurarse alguno de los mencionados supuestos, al culpable del ocultamiento o distracción dolosa de uno o varios bienes sociales, se le sanciona decretando la pérdida de la porción o cuota a que tuviere derecho en ellos, y además se le obliga restituir a la víctima doblemente los mismos, esto es, mediante la devolución material de la cosa y una suma equivalente a su valor comercial en dinero, y si tales elementos del activo patrimonial, ya no existen, o es imposible su recuperación, el reintegro comprende el doble de su precio en la moneda de curso legal.

“Esta Corporación, sobre los alcances de la citada norma, en fallo CSJ SC, 10 ago. 2010, rad. 1994-04260-01, expuso en lo pertinente lo siguiente:

“Ahora bien, ex artículo 1824 del Código Civil, cuando uno de los cónyuges o sus herederos, haya ocultado o distraído dolosamente alguna cosa de la sociedad conyugal, pierde su porción sobre la misma y es obligado a restituirla doblada.

“La disposición, cuya ratio legis, se orienta a preservar y tutelar la plenitud, igualdad e integridad de los cónyuges en lo atañadero a sus derechos en la sociedad conyugal formada por el vínculo matrimonial, sanciona el acto doloso de ocultamiento o distracción de los bienes sociales celebrado o ejecutado por uno de ellos o por sus herederos, y presupone para su aplicación la plena demostración fáctica, clara e

inequívoca con pruebas oportunamente allegadas al proceso y sujetas a contradicción, no sólo de la calidad jurídica del sujeto, del bien social y de la ocultación o distracción, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar daño, y éste igualmente debe probarse porque sólo se presume en los casos expresamente disciplinados por el ordenamiento (artículo 1516 Código Civil).

“Es menester, en consecuencia, la diáfana conciencia en el cónyuge o sus herederos sobre la naturaleza social de la cosa, esto es, la pertenencia del bien, derecho o interés a la sociedad conyugal, así como su intención de generar un daño o perjuicio al otro consorte con el acto de ocultación o distracción, más aún si se procura ‘reprimir aquella conducta dolosa del cónyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partición de los bienes sociales, valiéndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultación, u ora distrayendo bienes, esto es, alejándolos de la posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposición de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperación por parte del cónyuge afectado’ (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 1990), y por ello ‘es necesario probar la ocultación o la distracción intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal’ (cas. civ. sentencia de 1º de abril de 2009, exp. 11001-3110-010-2001-13842-01).

“Por esto, la sola disposición de bienes llamados a integrar el

haber social, por sí y ante sí, no es indicativa de un acto doloso de ocultamiento, distracción o fraude a la sociedad conyugal, por cuanto podrá hacerse sin el designio maduro de causar daño, cada consorte antes de la disolución tiene la libre administración y legitimación dispositiva de los que figuran a su nombre (art. 1º Ley 28 de 1932), sin perjuicio de aquellos actos que por norma expresa exigen la firma de ambos, y mientras no se disuelva ni esté llamada a la liquidación 'se encuentra en un estado potencial o de latencia que sólo a la disolución del matrimonio o cuando deba ella liquidarse, se convierte en una realidad jurídica incontrovertible', de donde, 'en razón de la multicitada autonomía que para el manejo económico de sus bienes tienen los cónyuges, mal podría hablarse de que 'durante el matrimonio' puedan éstos en estricto sentido ocultar o distraer cosa alguna de la sociedad; o, para mejor decirlo, tales ocultación o distracción resultarían inanes en tanto la sociedad no sea más que potencial, desde luego que es a su disolución cuando cada cónyuge pierde la facultad de administrar y disponer de los bienes y sería entonces y no antes cuando surgiría eventualmente su obligación de restituirlos a la masa social, de suerte que apenas en ese momento se concretaría respecto de ella esa pretendida sustracción. **De allí que la Corte haya enfatizado que la facultad de administrar y disponer libremente sólo se ve recortada al disolverse la sociedad, que es por este hecho que 'emerge la indivisión o comunidad de gananciales, y mientras perdure ese estado, o sea, entretanto se liquide y se realicen la partición y adjudicación de bienes, cada cónyuge pierde la**

facultad que tenía de administrar y disponer libremente de los bienes sociales. El desconocimiento de esta situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda un bien que tiene la condición de social (...), puede desencadenar la sanción contemplada por el artículo 1824 del código civil (...)' (Cas. de 25 de abril de 1991). Antes, pues, de dicha disolución no cabe la sanción que se comenta, la que, como tal, como sanción, es de aplicación restrictiva' (cas. civ. sentencia de 16 de diciembre de 2003 [SC-149-2003], exp. 7593) (negritas y subrayas no son del texto orinal).

"Naturalmente, liquidada la sociedad conyugal, se extingue la indivisión, los bienes se adjudican a cada consorte y pasan a su patrimonio propio, autónomo e independiente, por lo cual, se entiende por razones lógicas elementales, que el acto doloso de ocultación o distracción debe efectuarse mientras perdure el estado de indivisión, esto es, disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación (cas. civ. sentencia de 25 de abril de 1991), (...)." {CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, sentencia SC-2379 del 26 de febrero de 2016, radicado 11001-3110-016-2002-00897-01}.

En este caso, la prueba aportada no da cuenta del actuar doloso o de la intención de la cónyuge demandada para defraudar la sociedad conyugal y, de contera, causar daño al demandante; amén, que si bien la testigo Nora Emilse Maya Jaramillo, señaló que escuchó en reuniones en el colegio y de un cuñado del demandante que vende helados en la terminal,

que María Ofelia vendió los apartamentos y le dejó el local a los hijos para que al señor Jorge Iván no le tocara nada, no especificó la razón de su dicho, ni cuándo y dónde escuchó dichas versiones, ni determinó las otras personas de las que oyó tales comentarios y si dichas afirmaciones provenían de la señora Castaño Vallejo o si se trataba de simples rumores; pero además es imprecisa por no explicar circunstancias de tiempo, modo y lugar, careciendo de contundencia y, por tanto, no tiene peso probatorio; a lo que se agrega que por ser un testigo de segunda mano o de oídas no es idóneo como medio probatorio; por su parte, las testigos Victoria Enea Cano Grajales y Martha Lucia Jaramillo García, quienes adquirieron de la codemandada los apartamentos del segundo y tercer piso, respectivamente, nada dijeron al respecto porque no conocieron la negociación entre la señora María Ofelia Castaño Vallejo y sus hijos; igualmente, el declarante Francisco Javier Castaño Vallejo, hermano de la codemandada y a quien inicialmente le otorgaron poder los consortes para adelantar el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, demanda que no presentó porque fue nombrado para un cargo público; no hizo pronunciamiento alguno en cuanto al supuesto actuar doloso de la codemandada con el fin de defraudar y causar daño a su consorte; incluso, fue enfático en afirmar que no se enteró de la negociación entre su hermana y sus sobrinos, pues solo tuvo conocimiento que el inmueble estaba en cabeza de aquéllos el día que el demandante le informó que el impuesto predial llegó a nombre de éstos; creía que el negocio que celebraron fue una compraventa de la que desconoce los pormenores (Archivo 2015-0071520181212100706, DVD

folio 20 del presente cuaderno).

El hecho de declarar que la donación a favor de los hijos adolezca de simulación absoluta, como acertadamente lo indicó el Señor Juez a quo, per se no da lugar a la imposición de la sanción a que se contrae el art. 1824 del C. Civil, porque como viene de indicarse, resultaba imperioso que el extremo activo cumpliera con la carga de la prueba de que el acto obedeció al actuar doloso de la señora María Ofelia del Socorro Castaño Vallejo; esto es, que tenía pleno conocimiento no solo de que se trataba de un bien social; sino, además que su intención con la ocultación o distracción del bien perteneciente a la sociedad conyugal era la de causar daño al otro consorte.

Es pertinente puntualizar que como lo reconoce el demandante, su consorte dijo donar el bien raíz al que se contrae la demanda, cuando aún no se había disuelto la sociedad conyugal, pues incluso, afirmó que luego de que realizó los actos de enajenación presentó la demanda de divorcio; presupuesto indispensable para que se tipifique la sanción a que se contrae el art. 1824 del C. Civil, como lo precisa la jurisprudencia que viene de transcribirse; la situación sería bien diferente si tales actos de disposición se hubieran realizado una vez disuelta la sociedad conyugal, en cuyo caso, si tendría lugar la sanción como lo precisa el Tribunal de Casación.

De lo anterior se sigue, que la parte actora incumplió con la carga de la prueba que le incumbía por mandato del art. 167

del C.G.P., otrora 177 del C. de P. Civil

Conclusión: Consecuente con lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado.

Se condenará en costas a la parte demandante, a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052.00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

IV. RESOLUCIÓN:

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1. Por lo dicho en la parte motiva, se confirma la sentencia de fecha y procedencia indicadas.

2. Se condena en costas a la parte demandante, a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fija la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

(\$1.817.052.00), que equivalen a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

3. Se ordena devolver el expediente a su lugar de origen.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA

RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ

En permiso